

El Proceso de sujetivización de los excluidos urbanos

Elizabeth Maier

Resumen

En esta ponencia se realiza un análisis histórico del proceso a través del cual los miembros de los movimientos populares urbanos en México han definido su identidad y se han transformado en sujetos sociales autogestionarios de sus propias necesidades, en el periodo transcurrido desde la década de los sesenta hasta la actualidad.

El análisis tiene como marco las contradicciones que encarnan el proceso de modernización y la expansión de la macro-ciudad en los países de América Latina

*Términos claves:
movimiento urbano popular,
nuevas sujetividades urbanas,
México América Latina.*

Abstract

The Subjectification Process among Urban Outcasts. This report presents an historical analysis of the process by which members of popular urban movements in Mexico have defined their identity and have transformed themselves into autonomous social subjects, in the period between the 1960's and the present.

The framework of the analysis is based on those contradictions which embody the process modernization and the megalopolis in Latin American countries.

Keys Terms: Popular urban movements, Mexico, New urban subjectivities.

Investigadora de Ciudad de México



El entorno: los espacios y el tiempo

Durante los últimos años, la problemática de la urbe y sus habitantes ha estremecido la inteligencia humana en todo el planeta. De repente la macro-ciudad se ha resaltado como una de las características definitorias de la modernidad, particularmente en el Tercer Mundo. Modernidad exclusiva y excluyente, que durante las tres décadas paradas, ha traído consigo una mayor profundización de la dualización social entre pobres y no pobres, tendencia inherente al modelo de desarrollo. (1)

Las estadísticas presentadas recientemente por el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad plasman esta realidad social de creciente polarización. Mientras que el 17,3 millones de individuos en 1987 se encontraban en la pobreza extrema, otros 24 millones se clasificaron en pobreza no extrema, sumando un total de 41,3 millones de pobres a nivel nacional. La otra mitad de la población se ubicó en el rango de los estratos diversos que abarca la categoría de "no pobre" (2)

Reflejo de un proceso de desarrollo desigual, la migración a la urbe después de la Segunda Guerra Mundial respondió a un fenómeno contradictorio. La expansión de las fuerzas productivas, durante la etapa llamada sustitución de importaciones, actuó como un imán atrayendo a millones de personas, cuyas necesidades ya no podían satisfacerse bajo las condiciones de producción en el agro. La dialéctica de expulsión/absorción trajo a la Ciudad de México un flujo migratorio, paulatino, continuo y masivo que la forzó a flexibilizar sus anteriores parámetros

geográficos, integrando a su perfil los asentamientos anárquicos que iban brotando en las periferias de la urbe.

México ha experimentado dos etapas primordiales de crecimiento urbano. La primera abarca los primeros cuarenta años del siglo XX y se caracteriza por un crecimiento heterogéneo y paulatino de ciertas ciudades del país. Sin embargo, en estos años, todavía el 80% de la población total del país vivía en las áreas rurales. Entre las 55 ciudades que existían, la Ciudad de México mostraba el mayor proceso de concentración del poder económico, social y político, señalándola como el polo de atracción preferentes para los migrantes.

La segunda etapa de expansión territorial urbana abarca las décadas de cuarenta, cincuenta y sesenta. Corresponde a un acelerado proceso de transformación industrial, acumulación y reproducción de capital, concentración poblacional y reorganización social y cultural. Durante esta etapa, la relación poblacional entre campo y ciudad se transformó, registrando un 60% de ciudadanos del total de la población mexicana. Únicamente en la ciudad de México se encuentra casi la cuarta parte de la población nacional. (3)

Las y los migrantes del campo, empujados por la necia esperanza de una vida mejor para ellos y sus hijos, arribaron a la capital generalmente siguiendo a otros parientes o conocidos, quienes habían empezado la misma aventura de transformación existencial un poco antes. Como hongos, surgieron asentamientos irregulares en lugares todavía inhóspitos que rodeaban la fisonomía original de la ciudad.

De la marcha urbana inicial que abarcaba lo que actualmente son las delegaciones de Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la ciudad incorporó los poblados alejados del sur de Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Hacia el oriente, al vieja ciudad capital se extendió a Iztacalco e Iztapalapa, derramándose por el norte hacia el estado de México hasta incluir a Naucalpan, Tlanepantla, Xalostoc, Cuatitlán, Ecatepec y Tepotzotlán. Durante la década de los setenta, apareció Neza-hualcoyotl, todavía sin su extensión actual, pero mostrando indicios de conformarse en la mayor extensión territorial dentro de la gran marcha urbana. Finalmente los ochenta trajeron consigo la conformación de Chalco, la concentración poblacional en Villa Coapa, la invasión de los terrenos que rodean el Cerro de la Estrella y al Ajusco y la conformación de los nuevos asentamientos colindantes a Cuajimalpa. (*)

El proceso de masificación de la ciudad, junto con la implementación del proyecto económico neo-liberal, ha imprimido modificaciones sustanciales en la conceptualización misma de la organización urbana, influyendo en las políticas de uso del suelo, de bienestar social, de armonización ecológica y de control social.

Aunque actualmente el crecimiento y reacomodamiento de la ciudad parece caracterizarse por desplazamientos inter-urbanos, más que por nuevas olas de migración rural-urbana, la gran migración campo-ciudad durante las tres décadas después del arranque industrial, representó un fenómeno económico, so-

cial y cultural que modificó la cotidianidad urbana y secuencialmente la creación de nuevos actores sociales, que hoy día, pretenden consolidar su influencia en la gestión política de la ciudad.

La historia de su experiencia como individuos, como sector y como actores sociales es, a la vez, el testimonio de la constitución conceptual de otra modernización; la participación ciudadana en la toma de decisiones que determinan las condiciones de su vida diaria. El proceso de desarrollo de esta conciencia se fusiona con las condiciones de vida duras e insatisfactorias de los excluidos urbanos, sellándose con ciertos acontecimientos claves de la historia reciente de la Ciudad de México, que hicieron crecer su voz y unificar un coro de articulación positiva.

El inicio: ¿qué lejos estoy de la tierra donde nací!

Sin dinero, maquinaria ni infraestructura, los miembros de la familia migrante participaron en la empresa de levantar la nueva vida: arrancando hierba, partiendo piedra, acarriando agua, buscando leña, construyendo el refugio con lo que había, lavando y cocinando donde se podía. Pero sobre todo, moldeándose a la forma urbana de organizar el tiempo y distribuir el espacio que, contrastándose con el uso del tiempo y espacio en los pueblos mexicanos no industrializados, imprimía una nueva conducta individual y nuevas pautas de relación social a las vidas de todos los integrantes de la familia migrante.

El calendario natural, vinculado con las estaciones del año y el correr

del sol, fue bruscamente remplazado por el reordenamiento del tiempo dictado por las necesidades de los dueños del capital; un ejemplo del tiempo homogenizado y comprimido que aseguraba la máxima productividad y control de la fuerza de trabajo. Mientras que los hombres adultos se insertaron en los estratos no calificados de la planta productiva, cumpliendo los horarios del calendario industrial en sitios alejados de la casa y la familia, las mujeres asumieron las responsabilidades tradicionales del hogar y del cuidado de los hijos. Pero debido a las raquíticas e inseguras condiciones de los asentamientos nuevos, sus labores también incluían la edificación misma de la casa y la limpieza de terrenos, además de la extensión de su jornada de trabajo debido a la carencia de los más mínimos servicios como lo son el agua potable y la electricidad.

A pesar de los cambios fundamentales implícitos al nuevo entorno social, las familias migrantes funcionaban como una adaptación urbana de la unidad de producción y consumo que caracteriza la familia rural. Todos tenían responsabilidades puntuales dentro de la estrategia de sobrevivencia. Se seguía percibiendo a los niños como parte necesaria de la fábrica familiar y de la protección y seguridad de que gozarían los padres en su vejez. Hasta la década de los ochenta, el promedio de hijos por familia en los barrios periféricos, reflejaba la noción campesina que la familia grande vive mejor.

La gestión cotidiana por la regularización de los asentamientos inserto a la familia rural en otra nueva dinámica de relaciones directas con la estructura burocrática del Estado.

Dado que el jefe del hogar (siendo éste el marido, padre o hermano) generalmente estaba ausente durante el día, el proceso gestor de servicios y regularización de terrenos corrió a cargo del ama de casa. En su mayoría analfabetas, no acostumbradas a salir del ámbito hogareño, desconocedoras de las zonas y calles de la ciudad y novatas en la toma de decisiones, sus esfuerzos individuales por resolver su situación de irregularidad habitualmente, fueron ejercicios de frustración.

Se resaltaba la necesidad de unirse y juntas gestionar las condiciones satisfactorias de la vida cotidiana. Sin embargo, la nueva participación de las mujeres en actividades anteriormente percibidas como masculinas proporcionaron las condiciones en que el carácter femenino del agro empezó a transformarse. Poco a poco, entraron en contradicción con la anterior conceptualización de las mujeres como no aptas para las responsabilidades sociales fuera del hogar. A su vez, el sistema de educación básica obligatoria incorporó sin distinción a los hijos e hijas de la familia, reforzando así una cierta modificación de los valores y la normatividad frente a la constitución de los sujetos masculinos y femeninos.

No obstante, todavía existían (y aún existen) los tercos resabios de la familia y comunidad patriarcal del campo, y las mujeres tendían a pensar que los hombres tuvieron mayor conocimiento y autoridad moral frente a los burocratas urbanos. Surgieron así líderes masculinos de este incipiente movimiento fundamentalmente femenino. Inicialmente vinculados con el partido en el poder, en su mayoría caudillos locales; estos dirigentes solían aprovecharse de la

confianza colectiva para enriquecerse y aferrarse a pequeñas parcelas de poder, resolviendo con notoria ineficiencia las necesidades existenciales del colectivo de migrantes.

De esta forma, las estructuras corporativas del Estado penetraron en las colonias periféricas, con el objetivo de incorporar, a las instituciones hegemónicas, esta población amorfa, en términos clasistas, llamada en la Europa del siglo XIX "las clases peligrosas". (5) Sin embargo, los mismos vicios inherentes al corporativismo -la corrupción, el oportunismo y la antidemocracia- resultaron en un ejercicio de gestión insatisfactorio para la mayoría de los pobladores.

Las políticas oficiales encaminadas hacia este sector fueron mínimas, enredadas burocráticamente y extremadamente tardadas. El servicio eléctrico, el agua potable, la pavimentación, las escuelas y centros de salud, el transporte y la regularización de los terrenos, tardaron años en formar parte de los asentamientos.

El flujo migratorio, excluido en su lugar de origen de los beneficios de la modernización social y atraído a la ciudad por el anhelo de participar en ellos, se constituyó en el sector de los llamados marginados de la urbe. Generalmente, subempleados, contratados por obra en las labores menos calificadas, sin empleo fijo, ni prestaciones sociales, su esperanza de integrarse a las esferas más modernizantes de la ciudad solo quedaba en el recuerdo. Más bien, vinieron a robustecer el sector informal de la economía, dando testimonio de la restringida capacidad de absorción de mano de obra del sector industrializado y constatando un modelo de desarrollo cuyas características más

llamativas son un mercado interno, débil y una notoria división social entre, lo que Alain Touraine llama "los privilegiados y los excluidos". (6)

Juntos con los excluidos urbanos de siempre conformaron una identidad social, éste es conocido como el sector urbano-popular; sector heterogéneo que dentro de la masa territorial de la ciudad comparte la pertenencia a los diversos estratos económicos subalternos que el modelo de desarrollo ha generado.

Actualmente, los efectos del reacomodamiento de los capitales internacionales y del desarrollo de un nuevo patrón mundial de apropiación de ganancias ha impactado negativamente este sector. Es decir, los indicadores de bienestar, en términos de empleo, de su capacidad adquisitiva, la nutrición, la salud y la educación, descienden. (7) Pero, a la vez, crece el sector mismo, debido al descenso relativo y absoluto del nivel de vida de una parte de la población que anteriormente podría haberse considerado privilegiada.

En México, como en el resto de América Latina, la macro-ciudad y el sector urbano-popular encarnan las contradicciones del proceso de modernización, representando la cara excluida de sus beneficios. Plantean retos y necesidades, que, a no ser satisfechas, amenazan con rebasar los límites de funcionabilidad social y de respuesta posible.

Los actores políticos: la búsqueda de la voz.

En los sesenta la migración se volvió un fenómeno social. Atizados por la miseria, por un lado, y por el otro, el impacto de la masacre de 1968 en la juventud que se volcó al



trabajo organizativo, las y los habitantes de algunos asentamientos periféricos de distintas ciudades del país, empezaron a trabajar unidos, en un intento por resolver los problemas estructurales de la esfera privada de la vida. Así se inició un proceso de gestión civil que actualmente, ha desembocado, en lo que muchos autores ⁽⁸²⁾ denominan movimiento social, siendo éste un actor colectivo representativo de intereses comunes.

Las matrices históricas de la organización urbana.

El proceso de constitución y maduración de los sujetos colectivos urbanos, que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas, no solo en México, sino en casi todos los países de América Latina, se funda-

mentó en visiones políticas diversas en relación a las metas estatégicas, las tácticas y la potencialidad y perspectivas del sector. A la vez, estas utopías políticas han estimulado una producción académica de variadas y contradictorias interpretaciones del fenómeno.

A finales de los sesenta y principios de los setenta, agrupamientos inspirados en los procesos revolucionarios de Cuba y China, que se puede definir como de la izquierda radical, planteaban que en América Latina los excluidos urbanos aliados a los de-pauperizados rurales fuesen la semilla protagonista de un levantamiento revolucionario, en sustitución del protagonismo clásico de la clase obrera. Basaban su apreciación en las experiencias de transformación es-

tructural radical de otros países del llamado Tercer Mundo, cuyos procesos de desarrollo capitalista compartían rasgos similares con las naciones de América Latina, particularmente en relación a la combinación de formas y modos de producción, en donde el proletariado se resaltaba como una clase todavía muy joven, no cohesionada, relativamente pequeña, sin la fuerza suficiente ni la ideología para sí.

Por el otro lado, surgieron múltiples experiencias de trabajo comunitario que se puede describir como puramente reivindicativo, sin una conceptualización estratégica más que el bien intencionado objetivo de negociar -dentro de las estructuras de poder existente- los satisfactores necesarios para mejorar la calidad de vida de la población en cuestión. En muchos casos, esta conceptualización tuvo vínculos con agrupamientos religiosos que no rebasaban una visión local de la problemática.

Por último, históricamente, la tendencia populista de los gobiernos latinoamericanos, han hecho resaltar intentos de responder a ciertas de las reivindicaciones de los excluidos urbanos, a cambio de una subordinación al proyecto nacional que representan.

En la coyuntura actual parece pertinente destacar que, con raras excepciones vinculadas a los esfuerzos de integrantes de la Teología de la Liberación, ninguno de los planteamientos arriba mencionados hacían énfasis en la democratización de la vida cotidiana, en la autogestión ciudadana o en la reconceptualización de la cotidianidad como gestor de sujetos individuales, sociales y políticos. La profundización en torno a la subjetividad formal y real de los indi-

viduos sólo empieza a discutirse en la década de los setenta en Europa y a finales de los ochenta en América Latina.

De una forma u otra, en casi todos los casos, los individuos del sector urbano-popular fueron concebidos por los elementos dinamizadores de la organización social como sujetos abstractos, sea éste el sujeto revolucionario, el sujeto comunitario o el sujeto populista, cuya función fundamental giraba en torno a la defensa de la utopía preconcebida.

Antecedentes del Movimiento urbano-popular (MUP) en México

La recomposición social implícita en la expansión capitalista nacional hizo sentir sus efectos, no sólo en el surgimiento de los barrios marginales de las ciudades o en los intentos de organización independiente de la clase obrera, sino también influyó en la conformación de un sector universitario con pretensiones de un ejercicio democrático dentro de su ámbito natural. La respuesta estatal de brutal represión al movimiento estudiantil de 1968, generó vertientes distintas de rechazo al sistema existente, manifestándose a través de diversos proyectos de transformación social.

Un lugar común fue el planteamiento de la necesidad de trabajar organizativamente entre los sectores excluidos de la ciudad moderna, planteamiento que embonaba con la crítica situación existencial de las masas de marginados urbanos.

A finales de los sesenta y principio de los setenta, surgieron en distintas partes del norte del país pequeñas organizaciones de colonos, invasores de terrenos baldíos, quienes demandaban del Estado el derecho a un

techo. A su vez, en varias ciudades de la república nacieron movimientos urbanos reivindicativos y juntos se conformaron en los primeros núcleos del MUP.

No tardaron en multiplicarse en casi todos los aglomerados urbanos del país. Con la participación de las y los habitantes en la asamblea popular (máxima autoridad de las organizaciones independientes), en las movilizaciones y las tareas de mejoramiento y organización comunitaria, se consolidaron numerosos núcleos del MUP.

Dicho movimiento se conforma en base a los movimientos reivindicativos locales que se corresponden a las carencias específicas de los colonos. Las demandas son concretas: agua, pavimento, legalización de terrenos, escuelas, electricidad y centros de salud. El interlocutor es el estado, representado entonces por el Gobierno de Luis Echeverría.

"En esta etapa, escribe Pedro Moctezuma, el MUP muestra carencias ideológicas, organizativas y políticas. Los productos de su juventud, las luchas tienen un carácter fundamentalmente inmediato, reivindicativo sin contar con un horizonte político bien definido." (26)

Según la interpretación del sociólogo Alain Touraine, "la búsqueda de comunidad" implícita en la organización urbano-popular no se debe percibir como un movimiento social. De acuerdo con esta visión, el fenómeno urbano-popular no logra integrar los componentes definitorios de un movimiento social; siendo éstos: "la definición del actor mismo; la definición precisa del adversario; la definición del envite de su conflicto"

Touraine argumenta que el sujeto urbano-popular no tiene una clara definición debido a lo heterogéneo de su composición, tampoco puede ubicar con precisión al adversario, dado que sus expresiones son múltiples (casatenientes, funcionarios diversos, comerciantes, políticas gubernamentales, abogados, jueces, etc.) resultando finalmente en un adversario demasiado amorfo. Por último, dice Touraine, el excluido urbano colectivo no puede aprehender las dimensiones de su conflicto.

El autor propone la categoría de movimiento histórico para captar cabalmente el significado de los movimientos urbanos-populares. "...Lo esencial no es la defensa de intereses económicos, menos todavía una conciencia de clase; es la voluntad de ciudadanía. Por eso no hay que seguir hablando de movimientos sociales, porque esa búsqueda de la comunidad es, más exactamente, un movimiento histórico. Los movimientos sociales oponen una categoría social a otra, una clase a otra, mientras que los movimientos históricos ponen en movimiento la conciencia nacional y, más ampliamente la conciencia de pertenencia a una comunidad, a la familia, a la nación, pasando por la etnia y la colectividad local." (27)

La polémica que levanta Touraine con su definición del sujeto urbano-popular puede aparentar un ejercicio semántico, demasiado academicista. Sin embargo, aporta elementos para precisar la identidad del actor social, permitiendo así una percepción más rica del fenómeno que, a su vez, responda a las incógnitas y dificultades encontradas en la práctica de la consolidación de este personaje social.

En México, después del arranque inicial del MUP, la combinación de una embestida represiva contra los movimientos más avanzados, (Monterrey y el Campamento 2 de octubre en el D.F.) las prácticas oficiales dilatorias en la resolución de problemas, reducciones en el gasto social y el creciente deterioro económico, logró influir negativamente en el ímpetu del movimiento. Frente a la carencia de una visión más integrada de la problemática y sin planteamientos globales afinados, en términos generales las organizaciones urbanas vivieron un período de reflujo entre 1976 y 1979.

El año 1979 marca un nuevo empuje en la conformación del MUP, ahora abarcando la constitución de organizaciones regionales de distintos estados de la república (el Comité de Defensa Popular de Durango, el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco y otras) y el surgimiento de nuevas organizaciones a nivel local. Empujados por el duro inicio de la crisis económica y estimulados por el surgimiento de otros sujetos sectoriales (campesinos y magisterio) y por los acontecimientos de Centro América, los dirigentes del MUP se dieron a la tarea de conformar un ente nacional que aglutinara a sus múltiples manifestaciones locales.

Se conforma la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) en mayo de 1980, durante el Primer Encuentro de Colonias Populares de Monterrey. Pero no es hasta el segundo encuentro en 1981, en Durango, cuando la CONAMUP empieza a precisar la identidad del MUP, "se-

ñalando dentro de su heterogeneidad, su mayoría proletaria y defendiéndola ya no como una fuerza de apoyo sino como partícipe del movimiento revolucionario" (10)

Una de las dificultades en la precisión del carácter del sujeto urbano-popular surge frente a la conceptualización clásica de un sujeto revolucionario unívoco -la clase obrera- y la necesaria subordinación de las demás fuerzas sociales al protagonismo del proletariado. La búsqueda de identidad de otros colectivos sociales, cuyo adversario no se sitúa en una posición antagónica en el ámbito de la producción, se ha dificultado y distorsionado debido a la conceptualización, anteriormente generalizada en la izquierda, de subsumir las necesidades y demandas propias a la trascendencia del único sujeto de la transformación social radical, el proletariado. (11)

Para captar las dimensiones del MUP organizado a principio de los ochenta, vale señalar que en el Segundo Encuentro Nacional participaron más de 2 mil colonas y colonos, miembros de más de 60 organizaciones de 14 estados de la república.

El dinamismo del movimiento se expresó a través de una vida interna intensa: reuniones nacionales mensuales, comisiones inter-regionales, reuniones de intercambio de experiencias entre las distintas organizaciones locales, la elaboración de estatutos, principios y un plan de acción a corto plazo.

En mayo de 1981, se conforma la Coordinadora Regional del Valle de México, integrando a aproximadamente 40 organizaciones locales que acuerdan negociar colectivamente con las autoridades capitalinas, creándo-

se así una fuerza más potente y efectiva para lograr sus objetivos. (12)

Al interior de la CONAMUP coexisten diversas fuerzas políticas, aunque en realidad, más que distintas tendencias políticas fueron parcelas diferenciadas del poder en el mosaico de la izquierda radical. La conceptualización de la Coordinadora descansaba en la territorialización de su organización. La utopía detrás del proyecto concebía a múltiples espacios del territorio nacional, vinculados entre sí, a través de la coordinación, liberados del autoritarismo oficial y ejerciendo una especie de poder popular democrático y gestor de condiciones de vida adecuadas. Sus luchas se cristalizaron mediante los ejes de carestía de la vida, suelo, vivienda y servicios. La táctica generalizada fue la de la mo-

vilización y negociación, logrando la legalización de terrenos, la instalación de servicios y, en ciertos lugares, la construcción de viviendas populares.

Las mujeres del MUP: conciencia de clase o de género?

Un acontecimiento muy llamativo fue la conformación de la Regional de Mujeres del Valle de México en 1983. La iniciativa correspondió a las contradicciones que experimentan las mujeres, debido a la propia opresión de género, no sólo dentro de la sociedad en general, sino también dentro de las organizaciones progresistas. El MUP refleja una composición femenina de entre 80 y 90% y, sin embargo, hasta muy recientemente, todos los dirigentes fueron hombres. Vale destacar que en la



vida cotidiana de la gestión social, las integrantes de las organizaciones del MUP, resienten reclamos de sus parejas, maltrato físico y psicológico, abandono y otras dificultades relacionadas con la concepción tradicional del género femenino. Con la esperanza de aligerar el peso de las tareas asociadas al género femenino tradicional, las mujeres de los barrios populares engrosan las organizaciones representativas de este sector para luchar por el reconocimiento oficial de la titulación de sus terrenos, por el pavimento, el agua potable, la electricidad, clínicas de salud, escuelas y los mínimos servicios de "compensación" -como los tortibonos y los desayunos gratuitos para escolares- que el gobierno proporciona frente a las carencias del sistema que representa.

Vale la pena detenernos aquí y reflexionar, en términos de género y de conciencia, acerca del significado de la participación socio-política de las mujeres de los sectores populares.

En primer lugar, es precisamente debido a la definición genérica del sexo femenino —como encargada del hogar y de la familia— que tanto las mujeres como los hombres perciben como "lógica" y "natural" la participación femenina en los movimientos que se gestan y desarrollan desde y en torno a la llamada esfera privada de la sociedad. La mujer como responsable y del cuidado de los hijos también aparenta ser la indicada para resolver las carencias de este espacio social que se considera de su dominio.

Contradictoriamente para las mujeres del MUP su identidad genérica es la llave al mundo público, político y masculino, mundo, a que

no necesariamente se habían planteado entrar antes de que surgiera la necesidad. Las inadecuadas condiciones comunitarias, las del trabajo doméstico y las del desarrollo de sus hijos forjan la necesidad. El papel tradicional de género femenino les incita a una actividad que por su esencia pública y política confronta y cuestiona este mismo papel. Redefine objetivamente los márgenes de la caracterización social femenina.

En segundo lugar, las prácticas nuevas de la militancia socio-política no solo resultan para las colonas, en un territorio social ampliado y la consiguiente modificación de la definición de género, sino que también la misma participación produce, en muchas ocasiones, contradicciones con las exigencias de la propia identidad tradicional de ser mujer. Las reuniones, plantones, marchas y mítines frecuentemente impiden el cabal cumplimiento de las tareas cotidianas vinculadas con los roles de ama de casa y madre social. Defender políticamente a los propios intereses significa la ausencia relativa del sitio que es suyo -la casa-, e implica la búsqueda de sustitutas, la prolongación de la jornada del trabajo doméstico, escuchar los reclamos de los otros miembros de la familia y debatirse entre el constante conflicto del deber ser de sus responsabilidades hogareñas y el de sus actividades militantes.

La organización social y la movilización popular son manifestaciones concretas de la "necesidad consciente" (de la conciencia de la necesidad). Inicialmente las mujeres del MUP se organizan y se movilizan con base en la conciencia de sus carencias materiales y no en torno a la propia operación vivida como mujeres. En este sentido, conforman movimientos cla-

sistas de "género en sí"; movimientos en que la opresión clasista es palpada, reflexionada, confrontada y combatida colectivamente por mujeres que no han asumido todavía el mismo "darse cuenta" en relación al género. Aún no son movimientos de "género para sí",

Sin embargo, aunque la misma actividad socio-política de las mujeres produce las condiciones necesarias para su transformación en "mujeres para sí", dicha ampliación de conciencia no parece ser necesariamente mecánica ni espontánea, sino más bien es producto de la existencia de espacios autónomos -intencional y colectivamente creados- en que se puede reflexionar sobre la problemática. Dichos espacios facilitan el intercambio de experiencias e inquietudes individuales, la comprensión de lo generalizado de la vivencia, el descubrimiento de su vínculo con género y la asimilación de la perspectiva de género fusionada dentro de las tácticas y la estrategia de la lucha clasista.

Cuando esto pasa, género y clase se compenetran, pierden sus definidos perfiles de la abstracción y se sintetizan en una sola categoría, la de género/clase. Mujeres viviendo la condición de clase a través de todo el bagaje de significados socialmente implícitos en la identidad femenina, y experimentando la condición de género fusionada con los desafíos y dificultades intrínsecas de la vida diaria de la clase trabajadora. Es el proceso de desvendar los múltiples "ojos interiores" de la opresión y transformarse desde "persona objeto" (objeto de un destino no comprendido y de la propia vida) en sujeto, cuya praxis cada vez abarca ma-

yores dimensiones de la condición humana dentro del entorno social.

La articulación de género/clase se da en lo profundo del individuo. Se manifiesta en la manera de caminar, de sentarse, de expresarse verbal y emocionalmente, en los quehaceres cotidianos, en relación con la comida y el tipo de alimentos que se selecciona dentro de la cocina cultural. Se refunden género y clase en los gustos de diversión, en el sentido de humor, en las fantasías, los anhelos, los rasgos de personalidad, en el uso del espacio público y privado y la conceptualización del tiempo. En fin dentro de la manera de actuar, percibir y percibirse de las mujeres trabajadoras (asalariadas o no) está sellada su identidad de género/clase. Es una identidad que se conforma con base en las restricciones de la opresión. Asumir dichas limitaciones como "naturales" o "inevitables" es asumirse como objeto, víctima de fuerzas ajenas, agobiantes e intocables. Darse cuenta de las fuentes de la opresión y actuar para superar y transformarla es constituirse en sujeto, sujeto de la propia vida, la historia y la política social.

La construcción y consolidación del sujeto individual y social es un proceso complejo. Implica desenredar y desenmarcar, hacia adentro y afuera, las múltiples y mezcladas dimensiones de la opresión. Cada esfera de opresión tiene raíces propias y autonomía, pero estas fronteras precisas se vuelven borrosas al interior del individuo. La transformación de la mujer trabajadora en sujeto trae consigo la necesidad de concientizarse en ambas dimensiones de la opresión, junto con el consiguiente

accionar implícito en asumiéndose como agente activo y transformador.

La idea inicial de la Regional de Mujeres fue la de encarar y analizar juntas las contradicciones y dificultades de la participación socio-política de las mujeres; facilitando su militancia y proporcionando las condiciones en que puedan darse cuenta de la opresión que sufren por ser mujeres pertenecientes a la clase trabajadora.

De esta manera, las organizadoras de la Regional de Mujeres complejizaron la problemática de los excluidos urbanos, planteando la diversificación de las matrices de exclusión que conforman el sujeto urbano-popular. A la vez, empezaron un proceso de mayor democratización en la vida interna de las organizaciones, enfocándose no sólo en las grandes demandas frente al adversario gubernamental, sino también en la democratización de las relaciones personales, familiares y sociales. Dentro del discurso de las macro-demandas se empezó a infiltrar la voz de la vida cotidiana, apuntando de esa forma a una conceptualización distinta de la construcción del sujeto colectivo mismo, que rebase el mecanicismo y determinismo de la izquierda tradicional.

Reflejo de este proceso de reconceptualización de la problemática de la organización urbano-popular, es la política promovida por la dirección de la Regional de Mujeres desde 1989. Con el objetivo de democratizar la organización misma y particularmente su liderazgo, se conforma una dirección colectiva que sustituye el modelo anterior de dirección unipersonalizada. El nuevo

modelo de organización y de toma de decisiones no se limita a la cúpula de la Regional, sino que penetra en todos los núcleos comunitarios. Las reuniones semanales del conjunto de la Regional registran una rotación de representantes de las organizaciones locales, quienes, conjuntamente con la dirección colectiva abordan los problemas y planifican las acciones.

De hecho, esta novedosa forma de organización social trae consigo sus propias contradicciones, subyacentes en el desarrollo de una verdadera práctica democrática. La capacidad de tomar decisiones se alienta, pues ya no depende de la voluntad de una lidereza sino de la discusión y reflexión colectiva. Existe cierta amorfocidad y, a veces, inconsistencia en la participación de las representantes locales. La rotación de responsabilidades de representación, en ocasiones, lleva a la discontinuidad de los procesos en marcha.

Clara Brugada, anteriormente la máxima dirigente de la Regional de Mujeres y promotora fundamental de su propio relevo a través de la colectivización de la toma de decisiones, enfatiza que éstos son los costos inmediatos de cambios que, a mediano y largo plazo, resultaran en el fortalecimiento de la democracia interna, la formación de múltiples cuadros nuevos y el arranque de los procesos de autogestión comunitaria. (13)

Sin embargo, no está demás recordar que durante los primeros tres años de experiencia de la Regional - antes del terremoto - en las que se daban, cada vez más, manifestaciones masivas de mujeres, exigiendo desayunos gratuitos para sus hijos menores o tortibonos, la voz de las

excluidas urbanas dió testimonio de los efectos de la crisis, la deuda externa y de los costos de las transformaciones estructurales. Pero a la vez, y junto con otros entes colectivos del escenario urbano-popular, estas mujeres se fueron constituyendo en un participante social activo. Su práctica les transformó en un actor real del proceso de modernización que exigía un replanteamiento de sus términos y su inclusión en la conceptualización del desarrollo nacional.

El MUP empieza a percibirse y se percibe como uno de los sujetos sociales que intercede en el "estire y afloja" de la construcción nacional. Se asume como una fuerza de oposición, consolidada, que habla, participa y negocia.

El tiempo del temblor.

En retrospectiva, parece que el terremoto del 19 de septiembre de 1985 removió los cimientos, no sólo de los edificios sino del sistema mismo y de la sociedad. La tragedia que significó el temblor en la vida de tantas personas se contrastaba con la generosidad, la valentía, la solidaridad y el sacrificio de tantas más. El tiempo y el espacio, moldeados a las necesidades del capital y a la noción de gobernabilidad social que trae consigo, se fracturaron frente a la destrucción de las fuerzas de la naturaleza y a la ineptitud de las instituciones estatales.

El pueblo —en su más amplia definición— autogestionó su propia sobrevivencia y organización, integrándose a los procesos de rescate de vivos y muertos, a las brigadas de abasto, a la atención médica-sanitaria y a la conformación y organización de los primeros campamentos

de damnificados; en fin, durante las primeras semanas después del movimiento telúrico, el uso del tiempo y del espacio se transformó, humanizándose frente a las necesidades de los habitantes de la ciudad.⁽¹⁴⁾

El terremoto dejó huellas en la construcción social de la ciudad. La más obvia, por su carácter inmediato, se manifestó a través de la conformación de múltiples organizaciones locales, aglutinadoras y defensoras de los damnificados, en general impulsadas por activistas de las organizaciones y partidos de izquierda. Frente a la pérdida de la vivienda, bienes materiales y, en muchos casos, seres queridos, la organización significaba una mayor posibilidad de gestionar con el Estado, además fungía como un espacio de reconstrucción de la identidad personal propia que, en parte, había quedado bajo los escombros.

La CONAMUP no logró ser una fuerza social protagonista frente a la destrucción del sismo. No generó iniciativas organizativas de importancia y aparentemente, no tenía la voluntad de compartir la gestión urbano-popular con otros actores colectivos que amenazaban su hegemonía absoluta. Su apreciación del movimiento surgido del terremoto no valoró la importancia social y política, ni calculó las transformaciones ciudadanas profundas que resultarían de la práctica organizativa y gestonaria. Su incapacidad de superar el sectarismo la ensimismó, aislándose de los nuevos actores y, apostándose en la gestación de pequeños financiamientos mediante organismos no gubernamentales internacionales, lo cual resultó en su debilitamiento durante varios años.

René Bejarano, fundador de la Unión Popular Nuevo Tenochtitlan (UPNT), opina lo siguiente sobre la conformación de la Coordinadora Unificada de Damnificados (CUD): "Lo eminentemente social adquirió, casi de inmediato, connotaciones políticas; la confrontación subió de tono y acaparó la atención nacional. El partido oficial respondió tardía y contradictoriamente. Era el tiempo de la izquierda... Antes de que el oficialismo retornara la iniciativa y coptara o frustrara los imbriones de las futuras agrupaciones de masas, se precisaba de una organización central que pudiera convertirse en interlocutora legítima y válida ante el gobierno de Miguel de La Madrid... La CUD nació cubriendo el espacio que la sociedad civil requería; este fue su primer y gran acierto: su propia existencia." (15)

La CUP integró a casi una cincuentena de organizaciones locales, algunas con antecedentes anteriores al temblor, como la Unión de Vecinos de Guerrero y de Peña Morelos, y otras que nacieron a raíz de la tragedia, como la UPNT y la Unión de Vecinos y Damnificados (UVYD) de la Colonia Roma.

Con bases democráticas de representatividad igualitaria y la confluencia de diversas y frecuentemente encontradas posiciones políticas, desde su inicio, la CUD ejemplificó un esfuerzo plural de gestión cívica.

Una de las diferencias fundamentales entre la CONAMUP y la CUD, y tal vez la razón por la equivocada valoración de la primera, se encuentra en los espacios urbanos naturales de cada coordinadora: mientras que por lo general, la

CONAMUP integraba a las organizaciones de los asentamientos periféricos, la CUD aglutinó a las organizaciones del centro de la ciudad, área más impactada por el sismo.

Los habitantes de los barrios céntricos tienen otra historia y otra composición de heterogeneidad. Su historia está enraizada con el barrio y con la vecindad. En general, no fueron excluidos de la modernización, sino que se integraron al proceso de desarrollo en los eslabones menos privilegiados. Gozaban de servicios y de una mayor seguridad social que los habitantes de los asentamientos irregulares. El terremoto los sumergió en una situación existencial similar a la de la población periférica: situación precaria, desprotegida y desconocida.

Se aferraban a la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana anterior al temblor, de organizar el espacio privado a su gusto, (dentro de los parámetros que les pertenecía en la escala de privilegios) y reorganizar la vida comunitaria de acuerdo a los nuevos aprendizajes de una situación límite. Se organizaban para defender esta posibilidad y pelearon para hacerla realidad.

La CUD fue el sujeto colectivo que gestionó la reconstrucción con las instituciones gubernamentales, asumió la defensa de los barrios y del bienestar de sus habitantes.

Dice René Bejarano: "El derecho a permanecer viviendo en los lugares que se habitaban antes del sismo, el respeto a las formas de cultura popular, la acreditación para la expedición de los certificados de derechos, la organización en los campamentos, las ceremonias de carácter religioso, en su sentido ecuménico más amplio y la interlocución con las

Delegaciones Políticas, le dieron a la CUD un perfil propio, lleno de combatividad, inteligencia política y capacidad de gestión." (16)

La definición explícita por parte de las instituciones gubernamentales de la magnitud del desastre (44 mil viviendas destruidas y más de 100 mil afectados) y el reconocimiento implícito de la participación de la sociedad civil en el escenario de la organización post-sismo, sentaron las bases para la apertura oficial relativa frente a la gestión de las organizaciones representativas de los damnificados.

La CUD, en su papel de actor colectivo de los múltiples agrupamientos locales, protagonizó con habilidad y creatividad las negociaciones para la reconstrucción. El conve-

nio de Concertación Democrática firmado por el SEDUE, el Director de Programas RHP, partidos políticos, organizaciones sociales y ciertos organismos no gubernamentales (ONG) de apoyo, representó un paso fundamental en la pluralización de la gestión urbana, abriendo la etapa de negociaciones en materia de vivienda provisional, condiciones crediticias, desarrollo de obras, interrupción de revocaciones y amparos contra la expropiación y la acreditación de beneficiarios. (17)

Pero vale señalar que desde el primer momento del proceso negociador, la nueva coordinadora mostró características diferenciales en relación a las experiencias urbanopopulares anteriores. En primer lugar, su legitimidad frente a las auto-



ridades nunca fue cuestionada, ésta fue ganada en las calles durante los días y las noches que trascurrieron desde las 7:19 am. del 19 de septiembre, contando así con el reconocimiento y simpatía del total de la ciudadanía urbana. Más que una fuerza opositora, la CUD fue concebida por la conciencia colectiva civil como integrante natural de la resolución de la emergencia.

En segundo lugar, lo absoluto del desamparo de la población afectada y lo urgente de soluciones, a corto y a mediano plazo, exigieron de la CUD una visión global de la problemática y el desarrollo de políticas propositivas que, efectivamente rebasaron el terreno de lo puramente reivindicativo, para entrar en el de la planificación misma. Dicho esfuerzo contó desde su inicio con la participación de urbanistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos y ecologistas que, junto con la dirección orgánica de los damnificados y en consulta permanente con los afectados, desarrollaron propuestas integrales de reconstrucción, basadas en la noción de la participación ciudadana y la autogestión.

La fractura del orden social generada por el sismo, abrió nuevos espacios desde donde repensar y recrear la ciudad. Gestó un sentido de pertenencia activa que subvirtió las pautas enagenadas del comportamiento social, anteriormente percibidas como naturales. El MUP empezó a perfilarse como un sujeto con ansias de participación democrática en la gestión de la vida cotidiana de la urbe. Necesariamente, dicho anhelo desembocó en un creciente cuestionamiento de los mecanismos e instituciones del sistema corporativo.

Sólo un año después del desastre, en el primer aniversario luctuoso del terremoto, la fractura de los mecanismos corporativos se reflejaron en la competencia que el PRI (partido gobernante N. del e.) asumió con la CUD por llenar las calles de la ciudad. "El 19 de septiembre se movilizaron la FCR (Federación de Comité de Reconstrucción vinculada al PRI) y la CUD al Zócalo; la primera realizó lo que habría de ser la última marcha bajo la dirección del jefe de este partido (Salazar Toledano), mientras que la CUD refrendó su papel protagonista de primer orden en la reconstrucción. La prensa dió cuenta de las diferencias entre ambas movilizaciones, provenientes de Tlahuac, Xochimilco y Nezahualcoyotl; la del PRI se caracterizó por el acarreo, el desánimo y la resignación; en cambio las organizaciones de damnificados agrupados en el CUD manifestaron luto ciertamente, pero también entusiasmo, convicción y esperanza." (18)

De acuerdo con Angel Mercado, existen dos aspectos ligados a la estructura socio-económica y los actores urbanos colectivos que merecen ser destacados para comprender la relación Estado-Sociedad Civil después del temblor de 1985.

"En primer término, la destrucción del centro de la ciudad de México, en lo que hace sus dimensiones físicas, económicas e ideológicas, era ya un proceso histórico, que habiéndose iniciado hace dos décadas, presentaba una tendencia acumulativa que aceleraba su ritmo cada vez con mayor velocidad, profundizando las implicaciones políticas y sociales, que supone la disputa de un reducido espacio en manos de clases y fracciones de clase social antagónicas. Así

entonces, la destrucción del centro de la Ciudad de México era ya un proceso social sistemático que el terremoto de septiembre de 1985 no hizo sino violentar, acarriando consigo una destrucción masiva de fuerzas productivas, las más de ellas caracterizadas por la obsolescencia y/o el deterioro urbano."

"Por lo consiguiente, la solidaridad primero y después la obsolescencia social, cuentan con raíces profundas y no obedece a una expresión de espontaneidad o manipulación política. Por el contrario, la resistencia de los pobladores era ya también algo propio del centro de la ciudad: unas veces manifestada de manera activa y otras, veces de manera pasiva, a través de canales muy variados cuya expresión se cumple en el terreno de la cultura y la vida cotidiana. El terremoto de 1985, entonces no hizo sino potenciar esa resistencia situando en primer plano el reclamo de los pobladores acerca de la reconstrucción y el futuro de la ciudad, y alterando -como se vio- la correlación de fuerzas mediante la cual se practicaban hasta entonces las políticas urbanas y el control de las masas en la ciudad, en especial el centro."⁽¹⁹⁾

Durante el primer año y medio, después del temblor, la CUD registró no pocos logros. Artífice, coogestionador de la primera fase de reconstrucción, la Coordinadora también fue fundamental en la lucha por ampliar el decreto expropiatorio del 21 de octubre de 1985, cuyo resultado fue la elaboración del Programa Emergente de Vivienda Fase. A la vez, gestionó e implementó, a través de sus integrantes locales, variados y numerosos proyectos comunitarios que incluía instancias infan-

tiles, dispensarios médicos, casas de culturas, centros juveniles, campos deportivos y bufetes jurídicos"⁽²⁰⁾

Las organizaciones comunitarias que conformaban la CUD tenían una vida interna intensa, cuyo alcance abarcaba dimensiones que enriquecieron la vida cotidiana, en términos educativos, culturales, laborales, de salud y capacitación política. A la vez que dichos agrupamientos sociales estimulaban la participación constante y comprometida de sus integrantes, mediante las asambleas y otras responsabilidades vinculadas al funcionamiento de los distintos proyectos; también proporcionaban un sentido de pertenencia colectiva a los habitantes de los barrios del centro, que contrarestaba el anonimato social propio de las ciudades de masas y la impotencia implícita en esta forma moderna de alienación.

Sin embargo, terminada la etapa de emergencia a principios de 1987, las diferencias internas frente al quehacer futuro llevaron al CUD en camino a su primera escisión. La búsqueda del sendero de transición entre un sujeto social defensor de los damnificados del desastre natural y un ente colectivo que respondiera a necesidades -no vinculadas con el sismo- de los habitantes del centro de la ciudad, resultó en la confrontación insuperable entre la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco y la Coordinadora de Lucha Inquilinaria del centro por un lado y los demás integrantes por el otro. El antagonismo generado por los distintos planteamientos tácticos también hizo resaltar diferentes políticas, estilos encontrados en relación a la organización y proyección del trabajo político y las actitudes sectarias e intolerantes de antaño que durante la experiencia

de la gestión de la reconstrucción volvieron a perfilarse.

Al mismo tiempo y en cierta medida como reflejo de la discusión interna en la Coordinadora, muchas organizaciones locales sufrieron divisiones internas que involucraron a su membresía en procesos desgastantes en enfrentamientos cotidianos, luchas por el poder y acusaciones mutuas de corrupción y antidemocracia las debilitaron, restándoles la representatividad y autoridad moral de que habían gozado en sus inicios.

Otras experiencias comunitarias que surgieron con el temblor no tuvieron la vitalidad y creatividad necesarias para consolidar la organización y una vez resueltas las necesidades de vivienda de sus representados se quedaron vacías, sin una membresía real, volviéndose meros membretes.

Finalmente, la conformación del Partido Mexicano Socialista (PMS) también restó fuerza a la CUD. Frente a los procesos electorales en puerta y las diferencias políticas en el seno de la Coordinadora, organizaciones sociales relacionadas con las fuerzas políticas fusionantes del PMS, fundaron la Coordinadora de Luchas Urbanas (CLU), en un intento de plasmar en una de las manifestaciones de la contienda electoral las reivindicaciones de la lucha social.

Como resultado de estos factores, la CUD disminuyó su importancia y efectividad en el escenario político de la ciudad entrando en una etapa de reflujo de la cual, según René Bejarano, "no ha podido salir hasta ahora. Los gritos se suceden y las divisiones se profundizan." (21)

El reto de la construcción de la identidad colectiva de los no privile-

giados urbanos, como la de otros sectores sociales subalternos, manifiesta internamente una problemática contradictoria que ha tendido a quedarse en las sombras del silencio. Gira en torno al manejo de poder dentro de las organizaciones mismas y la conformación de élites dirigentes, cuya acumulación de experiencia política y especialización en problemáticas concretas, tienden a reconfirmar el liderazgo existente, desalentando o limitando la rotación de los espacios de dirección y propiciando una esfera cerrada en donde las y los dirigentes negocian entre sí la construcción del perfil de la colectividad. Dado que generalmente el liderazgo encarna largas trayectorias de práctica política relacionadas con posiciones definidas, cuyo rostro histórico ha tomado forma a través de la diferenciación y confrontación frente a las demás posturas, existe un acervo de reticencias y trabas en torno a la consolidación unitaria.

La cuestión del ejercicio de poder dentro de y entre las organizaciones sociales ha sido un tema ausente en el análisis de su genealogía y sus logros. Por el lado interno, no es sino hasta tiempo sumamente recientes que las dimensiones de la práctica democrática y las complejidades implícitas en su logro (particularmente frente a la mañana de significados cotidianos vinculados con la transformación del reparto y ejercicio del poder) han vuelto temas inquietantes y apasionantes. El fracaso de los modelos vanguardistas y corporativistas de Europa del Este ha recalcado la necesidad de una profunda revisión y un diálogo amplio en relación a cómo se concibe y cómo se practica la democracia, en qué dimensiones de la vida se penetra aquella práctica y como se requiere distribuir

y ejercitar el poder para desarrollarlo. Por el lado de la relación entre agrupamientos sociales, existe una tendencia de enfocar la problemática desde la perspectiva de las alianzas, sin ahondar en los patrones histórico-culturales que fundamentan la conformación de los estilos patriarcales (verticales, competitivos, autoritarios e intolerantes) del ejercicio del poder. Dichos estilos están tan fusionados con los tejidos socio-culturales que aparentan ser naturales frente a ojos propios y ajenos. Cobijan en su forma un contenido subrepticio que tarde o temprano entra en contradicción con el discurso democrático. Por ésto, los estilos de liderazgo y las formas de ejercer el poder merecen una reflexión colectiva seria y profunda. (22)

Tiempos modernos.

La conformación de la Asamblea de los Barrios y Organizaciones vecinales (ABOV) marcó un nuevo tiempo en la construcción del sujeto urbano-popular; la creatividad, el humor, la sorpresa y la puntualidad de la demanda -vivienda- hicieron que la naciente organización construyera su identidad desde parámetros distintos que las otras experiencias de organización urbano-popular.

Más como una ola en busca del mar que una estructura orgánica, como movimiento más que organización, la Asamblea de Barrios aglutina más que organiza, pero a la vez, pone en movimiento ejercicios de gestión popular que son importantes dentro del proceso de constitución de sujetos individuales y colectivos.

La ABOV se conformó en actor social empujada por la búsqueda de

seguridad habitacional para las familias o individuos que no gozaban de ella. La magnitud de la respuesta popular indicó a su vez serias limitaciones del modelo mismo desarrollo, si éste se mide por su capacidad de satisfacer las necesidades materiales básicas de la población en general.

Recreando la cultura popular mediante nuevos símbolos, sustituyendo el lenguaje tieso y telegráfico de la izquierda tradicional y abanderando las reivindicaciones habitacionales, ya no de los damnificados del sismo, sino de los del modelo mismo de desarrollo, la ABOV pronto tuvo un crecimiento disparado que no tiene comparación en el escenario urbano-popular. Entre abril y agosto de 1987, 24 mil familias se apuntaron en las listas de solicitantes de vivienda, ingresando a la vez a un proceso de gestión ciudadana de mayor alcance y consistencia social que el negociación de la reconstrucción. La ABOV nace de la problemática de la ciudad de masas, se inserta dentro de lo moderno desde sus carencias. No es marginal ni temporal, corresponde a características intrínsecas de la fase actual del proceso de desarrollo.

Paco Saucedo, uno de los fundadores de la Asamblea de Barrios, recuerda los inicios del movimiento: "El pueblo lucha hoy (1987) para darle continuidad a obras como la expropiación de predios de 1985 y el programa de Renovación Habitacional. La Asamblea toma esa bandera como eje aglutinador y articulador de un movimiento y lucha de masas amplio en el Valle de México. Los ejes fundamentales del programa de este movimiento se expresan en: 1) la necesidad de una ley inquilinaria en el D.F., 2) una nueva expropiación

de predios, y 3) la realización de programas populares de vivienda.”⁽²³⁾

Uno de los efectos del temblor fue el esquizamiento de la relación entre oferta y demanda dentro del mercado mobiliario. De antemano dicha relación manifestaba un desequilibrio favorable a la oferta, producto de las inadecuadas políticas de construcción habitacional para familias de bajos ingresos por parte del Estado y de la iniciativa privada. Pero a poco tiempo del movimiento telúrico, los juicios del desahucio contra inquilinos se pusieron a la orden del día, junto con aumentos extravagantes de los precios del alquiler. Resaltó de pronto que la reconstrucción de lo dañado por el terremoto era sólo una gota en el mar de necesidades habitacionales de los pobladores de la macro ciudad; carencia calculada en este tiempo en aproximadamente dos millones de viviendas.⁽²⁴⁾

Esto es lo que atinaron los organizadores de la ABOV, intuyeron que si de damnificados se trataba, gran parte de la población urbana debiera calificar para sus programas, aunque no fueran víctimas del sismo.

A diferencia de la CONAMUP y la COD, la ABOV no se organiza únicamente en base a la territorialidad, sino también en torno a categorías relacionadas con la situación habitacional. Desde su inicio, las y los asambleístas se aglutinaron en torno a tres categorías básicas: “*inquilinos* a través de vecindades o edificios organizados (levantando actas de asambleas de vecindad, nombrando sus representantes, iniciando las negociaciones para la compra-venta con los dueños)”; “*Arrimados*, constituyéndose en

grupos de solicitantes de 50 personas, de colonias o zonas cercanas y con la tarea de buscar predios o terrenos para luchar por su adquisición (en junio de 1987 había 110 grupos solicitantes)” y “*Con prestación de vivienda*, abriendo el registro de los derechohabientes de INFONAVIT y FOVISTE.”⁽²⁵⁾

Pero no sólo su forma de organización le diferencia a la Asamblea de Barrios de las otras colectividades urbanas, también su manera de articular la identidad del sujeto urbano-popular y su estilo de hacer política. Fueron extraordinariamente creativos en el desarrollo de sus acciones públicas, nunca quedando únicamente en la movilización (la marcha) y la negociación, siempre recreando aspectos de la personalidad colectiva de los no privilegiados urbanos y de su cultura cotidiana, para el deleite de las y los integrantes de la organización y de la sociedad civil en general.

La creación del Superbarrio y su propio proceso de constitución del sujeto colectivo aportó a la construcción de la identidad del actor urbano-popular en su conjunto; representa y es apropiado por todos las y los excluidos independientemente de su afiliación orgánica. Superbarrio es la conciencia colectiva de la ciudad. Empezó su acción cívica defendiendo los inquilinos pobres y desamparados, pero su corta vida se ha consolidado en una conciencia más amplia que, además de la problemática habitacional, abarca peligros para la ciudadanía como lo son el Sida, la Deuda Externa, los fraudes electorales, la contaminación ambiental y el empleo de la energía termo-nuclear. Inicialmente concreción humana del espíritu de lucha por la vivienda.⁽²⁶⁾

Superbarrio se ha vuelto un símbolo de la subjetivación ciudadana en general, y particularmente de los habitantes de la ciudad más grande del mundo.

Tal es así que saliendo de la casilla electoral. Cuauhtemoc Cárdenas afirmó: "Mi voto a la presidencia ha sido por Superbarrio. Es un reconocimiento a las luchas de todo el pueblo de México, no sólo de los habitantes de la ciudad, no sólo al esfuerzo de organización que surge después de los sismos de 1985, sino un reconocimiento a todos los luchadores populares..."⁽²⁷⁾

La contienda electoral del 6 de julio de 1988 imprimió otro reagrupamiento en el MUP, proceso que empezó casi un año antes. El Frente Metropolitano, intento fugaz de aglutinar a la recién formada Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), —organización hegemónica dentro de la CONAMUP—, la CLU, la CUD, la Coordinadora de Pueblos y Colonias del Sur y la ABOV en una instancia de mayores dimensiones e importancia, no resistió las diferencias en torno al proceso electoral y se deshizo antes de poderse consolidar. Las disputas frente a la encrucijada de participar o abstenerse y en relación a que candidato y que proyecto dividieron al esfuerzo unitario, haciendo resaltar tres posiciones distintas.

Tal vez, para el movimiento urbano lo más significativo de la etapa pre-electoral de 1988 fue la modificación de la posición históricamente hegemónica dentro del MUP en relación a una práctica de abstencionismo activo; planteamiento que en la coyuntura actual resulta marginal y autoexcluyente, descansando más en el voluntarismo de la

utopía revolucionaria que en las condiciones objetivas y subjetivas forjadoras de la realidad.

La práctica de la democracia participativa desde las bases del colectivo urbano-popular originalmente descansaba en una concepción de enfrentamiento antagónico entre democracia representativa y democracia participativa. A la vez vale mencionar que lo que definían como democracia participativa no siempre la fue, con frecuencia solo resultaba un simulacro distorsionado de la misma, basado en avalar planteamientos vanguardistas, más que el desarrollo de procesos auténticamente autogestionarios. Los protagonistas de dicha posición consideran que, independientemente de la coyuntura, la participación electoral no es sino la legitimación del sistema explotador.⁽²⁸⁾

El MUP capitalino de 1987-1988, compuesto en gran parte por identidades colectivas surgidas de la situación pos-sismo y producto de varios años de intenso proceso de gestión y negociación, se inclinaba mayoritariamente a participar en la contienda electoral, no solo apoyando los distintos partidos progresistas de oposición sino con candidatos propios que directamente representaban las organizaciones urbano-populares.

Mientras que en la contienda de 1982, la llamada "izquierda social" contaba con 12 candidatos propios a través de los registros del PRT y el PSUM, en 1988 se postularon 36 candidaturas a la Asamblea de Representantes del Dto. Federal y 30 a la Cámara de Diputados.⁽²⁹⁾

Llegó la hora de repensar y reelaborar la relación entre democracia participativa directa y democracia representativa, complejizando el quehacer político frente a una socie-

dad nacional y a una convivencia planetaria mucho más compleja.

Los ochenta gestaron los actores colectivos (CONAMUP, CUD, CLU, ABOV) que juntos contribuyeron a la constitución del sujeto urbano-popular. De la acumulación de más de diez años de luchas reivindicativas y propositivas y frente a la nueva correlación de fuerzas a nivel mundial y regional surge una nueva utopía: la apropiación del derecho a la ciudad, entendido como la participación democrática en la planificación de su organización y funcionamiento y en el goce de sus beneficios y placeres.

La integración de las dos dimensiones de la democracia —la directa y la representativa— se vuelve una meta imperativa en el desarrollo de la nueva estrategia del sujeto urbano-popular. Dice el investigador Alejandro Espinoza: "surgió la necesidad de tejer puentes entre la democracia directa y la representativa, lo que también influyó en la transformación de las organizaciones mismas."⁽³⁰⁾

Vale enfatizar que las mismas condiciones de masificación del Dto. Federal y de las otras macro-urbes, cuestionan la efectividad de apostar a un único instrumento como es la democracia representativa, para atender políticamente a las necesidades e inquietudes de todas las "micro-ciudades" que componen a los centros urbanos masivos.

Pero también existe otra preocupación frente al ejercicio de la democracia representativa en México que gira en torno a mecanismos e instituciones, todavía ausentes que faciliten y garanticen vías de comunicación entre representados y representantes. Frente a la premisa políti-

ca mexicana de "no reelección", con demasiada frecuencia las y los representantes pierden todo contacto con los habitantes que les eligieron, respondiendo más a proyectos partidistas a intereses personales que a las preocupaciones del electorado que representan.

Touraine afirma que dicho fenómeno es característico de lo que él llama el modo de desarrollo latinoamericano. Según este sociólogo, los elementos de dicho modelo relacionados con el desencuentro entre representados y representantes son: 1) la ausencia de una clara separación entre sociedad civil y Estado, resultando en una confusión por parte de los actores sociales en torno a la identidad del interlocutor y su relación con él; 2) el predominio de las categorías políticas sobre las sociales, debido a la debilidad de los actores de clase y la heterogeneidad amorfa de los demás actores sociales, y 3) una autonomía relativa de los actores políticos a causa de la "disociación de la vida política y de un poder económico que está, en buena medida, en manos extranjeras, que depende del estado del mercado mundial, por un lado, y de las decisiones de gobiernos extranjeros y de empresas transnacionales, por el otro... Así, resulta que los actores políticos ocupan un vasto espacio que, en otros países, estaría ocupado, de un lado, por una clase dirigente nacional, y de otro, por fuerzas sindicales o de otro tipo, representando los intereses populares."⁽³¹⁾

La participación electoral del MUP en 1988 se repartió entre dos opciones opositoras: la lucha por el socialismo representada por la Unidad Popular que nucleó el PRT y el

proyecto neo-cardenista representado por la coalición de partidos aglutinados en el Frente Democrático Nacional (FDN). Mientras que la mayoría de las organizaciones locales integradas en la CUD se definieron por la opción socialista, otras de la misma Coordinadora experimentaron rupturas frente a las dos corrientes electorales en su seno. La UPNT se fraccionó en UPNT-norte y la UPNT-sur; la primera con líderes de tendencia neo-cardenista y la segunda con dirigentes de tendencia socialista-troskista. También la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores (UVCD) registró una división que resultó en el abandono de la CUD por una de las partes y su adhesión al Movimiento Vida Digna.

Los dirigentes de la CUD identificados con el neo-cardenismo compartían esta posición con los de la Asamblea de Barrios y, después del retiro de la candidatura de Heberto Castillo en favor de Cuauhtemoc Cárdenas con los líderes de la CLU.

En síntesis, el MUP independiente reflejó tres respuestas frente a las elecciones de junio de 1988: la alternativa socialista, la opción neo-cardenista y la posición abstencionista. Dentro de lo cuantificable y comprobable fue el neo-cardenismo que logro influir no solo en las bases orgánicas sino en la mayoría de los habitantes de los barrios populares, creando para las organizaciones que apoyaban a la opción cardenista condiciones muy favorables para su crecimiento y fortalecimiento.

El 6 de julio de 1988 fue otro terremoto, ésta vez producto de la acumulación del descontento ciuda-

dano subyacente al manejo político, económico y social de un régimen con más de 60 años en el poder. Para el partido oficial fue la segunda llamada en menos de tres años. Antes de la tercera que, siguiendo la metáfora, pudiera anunciar la presentación de una obra no ensayada, se tendría que introducir modificaciones en los patrones dominantes de gestión y control social. Los resultados de las elecciones de 1988 constataron la creciente ineficiencia de los viejos mecanismos corporativos de control social y político y, a la vez, simbolizaron un rito de pasaje entre la vida cívica embrionaria y el nacimiento de la sociedad civil mexicana.

El post-parto: el panorama actual.

El desafortunado manejo del conteo electoral del 6 de julio de 1988 y la pérdida de consenso por parte del PRI en la capital de la república imprimieron a los respectivos mandos de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís retos sumamente difíciles. En particular en el Dto. Federal, donde los partidos políticos opositores participaron en las mesas directivas de casi todas las casillas electorales, se pudo constatar que los habitantes de la ciudad concedieron a la oposición una hegemonía indiscutible. Victoria opositora que, a la postre, vino a descubrir y resaltar la orfandad ciudadana de la población capitalina, siendo ésta los únicos habitantes a nivel nacional sin el derecho de elegir sus gobernantes locales, entre los cuales se destacan el regente y los representantes delegacionales.

Los resultados de las elecciones de 1988 hablan de transformaciones profundas en la conciencia colectiva de la ciudadanía de la urbe y del país.

La actividad política ejercida a través de las elecciones, fue acogida por las y los ciudadanos como parte importante del desenvolvimiento de su vida como un quehacer que no sólo pertenece a los especialistas sino también a ellos; como un derecho a ejercer plenamente. La sociedad civil se constituyó, se estiró a sus anchas, midió sus fuerzas y exigió un trato de mayoría de edad.

Junto con los demás actores sociales del escenario urbano (a raíz de la competencia electoral surgieron nuevos entes representando otros colectivos de subalternos, como mujeres, jóvenes, sindicalistas, el ambulante, etc), se tomaron parques, quioscos, plazas, zocalos; organizaron festivales culturales, marhas, plantones, mitines, conciertos; hablaron, gritaron, rieron, sintieron la ciudad suya, se apropiaron de los espacios y jugaron con los tiempos.

Frente a la negación ciudadana que significa la asignación de los funcionarios capitalinos, la Asamblea de Barrios llamó a la conformación de un órgano gobernante popular paralelo. En un esfuerzo de voluntad política de la gran mayoría de los actores colectivos de la arena urbana, se constituyó la Convención de Anahuac. Deliberaron sobre los servicios, la vivienda, la contaminación, el machismo, la democracia, la política económica y el derecho a la cultura, el descanso y la diversión. No obstante, la voluntad de seguir en el imaginario gubernamental no duró mucho. Los canales de expresión de dicha dimensión gestadora no estaban perfilados y, una vez más, la problemática del neocardenismo como eje aglutinador volvió a agitar las aguas de la unidad.

La efervescencia ciudadana que caracterizó el calendario urbano en los meses inmediatamente después de la llamada insurrección electoral, empezó a diluirse, opacarse y asentarse otra vez dentro de una mayor gobernabilidad, mostrando una relación directa entre su reflujo y la avanzada gubernamental del nuevo sexenio, el impacto de las políticas de ajuste, la cada vez más difícil situación económica, la falta de un proyecto opositor integrado y sectorizado, los sectarismos e intolerancias de siempre de los dirigentes opositores y la habilidad política del nuevo gobierno para negociar y concertar, confluyeron en la conformación de un panorama inmediato menos optimista para la izquierda y el centro-izquierda. La euforia de la borrachera electoral se disipó entre el amanecer de la cotidianeidad sexenal.

Las políticas de la nueva administración frente a la pérdida del consenso urbano y el cuestionamiento de su legitimidad en el discurso del actor urbano-popular, se desarrollan con base a tres propuestas enfocadas hacia la rearticulación de la hegemonía sociopolítica: 1.—La concertación bilateral entre el gobierno y las fuerzas políticas opositoras, como premisa de la gestión actual; 2.— El PRONOSOL como centralizador de variados gestos de política social, particularmente frente a la cuarta de la población que se encuentra en los estratos de pobreza absoluta; y 3.— La promoción de los derechos humanos como el pilar ético de la modernización y como respuesta a los reclamos ciudadanos generalizados frente a las fraglantes violaciones de los mismos.

No es el objetivo de este ensayo analizar los contenidos de ni las implicaciones de los ejes sociales de la política salinista, sino más bien situarlos dentro del escenario urbano para poder matizar la atmósfera neoliberal que, junto con los anhelos democratizadores, actualmente incitan a los sujetos urbanos-populares a buscar el protagonismo socio-político.

Durante los dos años desde la experiencia electoral de 1988, los actores colectivos del escenario urbano-popular han entrado en una etapa de reacomodos frecuentes: sin un proyecto sectorial que logre integrar a un plano político de proyección propositiva las reivindicaciones sueltas del sujeto urbano-popular; con recelos y poca transparencia frente a la política gubernamental de concertación⁽³²⁾; y, de intentos unitarios que no logren cuajarse del todo, debido a las tendencias antes mencionadas del predominio de las categorías políticas sobre las sociales.

Actualmente dentro del MUP independiente se distinguen, entre otras, dos personalidades fundamentales del sujeto urbano-popular, que se manifiestan a través de dos coordinaciones, ambas constituídas a finales de 1989; la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONMUP) y la Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (ANAMUP).

Las similitudes de ambas coordinadoras se encuentran en el principio básico que sustenta sus proyectos: el desarrollo de una sociedad basada en la democratización de la vida económica, social y política de la ciudad y del país. A grandes rasgos, se puede afirmar que los imagi-

narios estratégicos coinciden; pero como siempre, las dificultades surgen en cuanto a las tácticas a seguir para lograr la utopía. Tal es así que la identidad de cada uno de estos referentes del MUP aparenta definirse frente al otro y no en torno a su relación con el régimen.

Los desencuentros giran en torno a las diferencias implícitas entre, por un lado, la lucha por restaurar la República (como dirían los neocardenistas de la CONMUP) y el desarrollo de las condiciones para la construcción del socialismo en su concepción clásica, que representa la ANAMUP.

La motivación principal de la CONMUP es la de participar en el reparto del poder político aquí y ahora. En beneficio del sector urbano-popular se pretende acceder a las distintas instancias, instituciones y procesos de gestión de las urbes, a través de la constitución de un sujeto político fuerte, competitivo y emprendedor. Se trata, pues, de la conformación de un actor colectivo sectorial que, mediante la competencia democrática electoral, sea capaz de modificar el modelo corporativo del ejercicio del poder e ir ganando el control de los espacios institucionales, productores de la vida cotidiana.

Dentro del CONMUP confluyen organizaciones sociales, que a pesar de su identificación con el neocardenismo social, aspiran a mantener una autonomía frente al PRD. La ABOP, la UPNT-N, la UCP y Alianza Vecinal, además de una serie de organizaciones sociales más pequeñas y localistas, actualmente ensayan nuevos patrones en la relación entre la organización social y el partido político. Sin embargo, vale señalar

que la cultura corporativa tiende a reeditarse con demasiada facilidad, justificada por la necesidad de acuerpar fuerzas en contra del corporativismo oficial.

La ANAMUP integra a las organizaciones sociales y políticas que plantean como objetivo primordial, pero a largo plazo, la conquista del socialismo en México. En torno a dicho planteamiento aglutina un espectro ideológico amplio que según ciertos analistas muestra una mayor pluralidad que la CONMUP. Sin embargo, dicha conclusión es cuestionable dada las variadas tendencias que también confluyen en el neocardenismo social.

Conformada por la mayoría de las cinco uniones que actualmente componen la CUD (la UPNT-S, la UVD, La UVCG), además de la CONAMUP (en particular la Regional de Mujeres y la UPREZ), la UCAI y otras, la ANAMUP como tal no muestra el mismo interés en los procesos electorales que la CONMUP. Alguno de sus integrantes plantean la conformación de un frente clasista y socialista (Frente del Pueblo) para los comicios de 1991; otros miembros de la ANAMUP plantean el abstencionismo militante y todavía otros proponen alianzas electorales con el PRD. Pero por lo general, existe en la ANAMUP un rechazo al neocardenismo, visto éste como una posición reformista, burguesa y claudicante.

Inicialmente la Coordinadora del Consejo de Abasto pareció lograr un puente entre ambas posiciones con la propuesta de unificarse en torno a la satisfacción del abasto; demanda que empieza a expresarse cada vez con mayor resonancia y nitidez.

El pacto contra el hambre firmado en agosto de 1990 por todos los sujetos colectivos que juntos conforman el MUP, explicita las siguientes demandas: 1.— Audiencia con el gabinete económico a fin de encontrar solución de fondo a nuestras demandas; 2.— Alto al aumento de los precios en los productos básicos y de uso generalizado, 3.— No a la cancelación de los programas sociales y del subsidio en materia de alimentación y abasto popular; 4.— Respeto a nuestros canales de distribución de los productos subsidiados y abastecimiento suficiente y permanente de éstos; 5.— Exigimos que la nueva miscelánea fiscal no grave con ningún tipo de impuesto a todos los sectores de bajos ingresos; 6.— Participación en la toma de decisiones que afecten o modifiquen los programas sociales estatales relacionados con la alimentación y el abasto popular ⁽³³⁾

El encuentro unitario no logró permanecer más que un mes y medio en sus dimensiones originales cuando sintió la misma embestida en sus entrañas que cuando el movimiento experimentó dos años atrás y, una vez más, el MUP arribó a otra fase de reagrupamiento. El pacto contra el hambre todavía aglutina organizaciones de ambas coordinadoras, pero las de flagrante antipatía neocardenista ya no engrosan sus filas.

No deja de asombrar la persistencia de las prácticas políticas endógenas, sectarias e intolerantes dentro de la izquierda; sobre todo en un momento histórico en que el discurso de la democracia, la tolerancia y la pluralidad domina todos los horizontes y acuerpa a todas las utopías factibles. Los desmoronamientos de

las experiencias modernas de gestión estatal basadas en la exclusividad perpetua del ejercicio del poder, parecen indicar que la inclusión y no la exclusión sea un anhelo profundo de los pueblos.

Sin embargo, frente a los todavía tercos resabios de los poseedores de la verdad absoluta, resaltan experiencias como el pacto contra el hambre que, a pesar de la reciente división, ejemplifique las posibilidades direccionales y dimensionales de alianzas que puedan surgir cuando las categorías sociales predominan sobre las políticas. Frente a la cada vez más desesperada situación de abasto para los excluidos urbanos, se constituyen, independientemente de la afiliación partidaria un sujeto colectivo que lucha contra su hambre y su desnutrición.

Las condiciones objetivas tan críticas para el sector de los pobres urbanos imprimen en la conformación de los nuevos actores colectivos identidades sociales que, por lo general, tienden a relegar la importancia de las identidades políticas. El pacto contra el hambre, conformado por las distintas fuerzas de la izquierda social junto a priistas y ex-priistas, apunta a la constitución de sujetos colectivos nuevos aglutinados en torno a definiciones sociales que en otro momento podrían reformularse en definiciones políticas.

En este sentido la situación actual se perfila contradictoria para los colectivos sociales del partido gobernante. En particular, la reestructuración de la organización que representa a los sectores populares (anteriormente la CNOP, ahora UNE-Ciudadanos en Movimiento) que respondió a la pérdida de convocato-

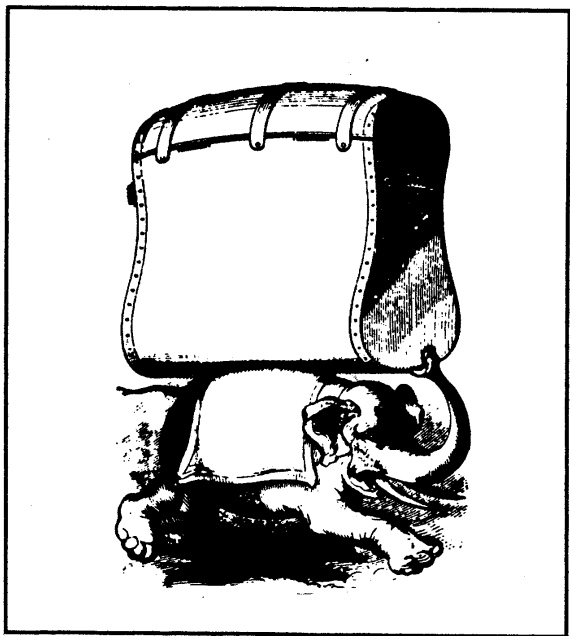
ria y consenso experimentada desde el temblor, se enfrenta a una disyuntiva difícil de resolver. Uno de sus cinco movimientos componentes representa el sector urbano popular, colectivo social sumamente golpeado por las políticas económicas de los gobiernos priistas. Aun cuando el control corporativo sobre las organizaciones integrantes al UNE fuese amenguado y el margen de su actuación autónoma se ampliara, las demandas concretas de dicho sector confrontan los ejercicios de gestión gubernamental de su propio partido. Sin embargo, los intentos de enfatizar distancias entre el partido en el poder y el poder estatal mismo, y la renovación de los cuadros del liderazgo (ya gastados por la corrupción y el caudillismo) que sustentan dicho agrupamiento político a nivel de base, podrían inyectar un nuevo aire de convocatoria al PRI.

Todavía está por verse la influencia del nuevo partido político, el Partido del Trabajo, en el escenario de los excluidos urbanos. Aún falta por explicitar su rumbo, sus contenidos programáticos, y su política de alianzas. Aunque muchos izquierdistas y centro-izquierdistas consideran este nuevo intento organizativo como un esfuerzo gubernamental por dividir el apoyo popular del neocardenismo, vale recordar que los dirigentes del Partido del Trabajo son en gran parte los mismos dirigentes del antiguo movimiento urbano popular. Representan fuerzas políticas consolidadas en Durango, Chihuahua, el Distrito Federal y Monterrey, entre otros lugares. Conocen el lenguaje y la metodología de la organización popular y reflejan una trayectoria de años como líderes políticos opositores.

Este nuevo momento en la constitución de los sujetos individuales y sociales tiene relevancia tanto para la oposición como para el partido oficial. El quehacer político redimensiona el movimiento de la vida social, si se controlan las expresiones de la vida social, si se las canaliza dentro de categorías políticas antes de madurar socialmente, el juego político se vacía de sentido y los individuos enajenan su subjetividad en la maraña de organizaciones e

instituciones que actúan en su nombre.

En grados y formas diferentes, pero tanto para el partido institucional como para las fuerzas políticas opositoras, el nuevo momento social y las nuevas exigencias de una sociedad civil que a pasos agigantados se asume como sujeto social y político, significan retos en relación a la democratización de la organización social y política, sin la cual no se puede concebir la modernidad.



NOTAS

1. Véase A. Touraine, *América Latina, Política y Sociedad*, Espasa-Calpe, Madrid, 1989.

2. *La Jornada*, "Pobreza: sobran los comentarios", Jos Woldenberg, 29 setiembre 1990.

3. *Tendencias Generales de la Política Urbana*, Centro de Apoyo al Movimiento Social Urbano (CAMSU), p. 9, México, 1989.

4. *La Jornada*, "¿Cuántos somos en la ciudad de México?" Enrique Calderón, 24 setiembre 1990.

5. A. Touraine, op. cit., p. 236.

6. El autor francés opina: "Los países de América Latina... no son sino parcialmente sociedades nacionales: arriba, los privilegiados pertenecen más a un sistema económico cuyo centro no está en América Latina; abajo, los excluidos, las ciudades y sobre todo los campos, casi no participan en los intercambios económicos y en el sistema político nacionales" op. cit. p. 526.

7. De acuerdo con artículo de Demetrio Sodi de la Tijera, publicado en *La Jornada* el 20 de octubre de 1990, mientras el salario mínimo ha subido en un 26% entre diciembre de 1988 y setiembre de 1990, la canasta básica se ha disparado alarmantemente: la tortilla subió en un 118.2%; el pan en un 27%; el frijol en un 165.5%; el arroz en 104%; el azúcar en un 189%; la leche no subsidiada en un 63.2% y la subsidiada de Liconsa en un 212.5%. El transporte ha subido en un 200% mientras que el alquiler se ha aumentado en un 82.9%.

Según datos propuestos por el Pacto Contra el Hambre, entre enero y julio de 1990, el frijol ha subido de precio en un 262%, el arroz en un 126%, la leche en un 162%, la tortilla en un 118%, las harinas en un 74% y el azúcar en un 69%.

8. Véanse los siguientes trabajos: 1) F. Calderón, *La Política en las calles*, La Paz, CERES, 1982; 2) E. Jelin, (bajo dirección de: Los nuevos movimientos sociales, 2 vols., Buenos Aires, CEAL, 1985; 3) Zermeño, "Estado, clases y masas, en *Revista Mexicana de Sociología*, México, 1978.

9. Testimonios U.A.G.M., CONAMUP, Breve semblanza del movimiento urbano popular y la CONAMUP, p. 6, Guerrero, 1983.

10. A. Touraine, op. cit., pp. 249-250.

11. P. Moctezuma, op. cit. pp. 6-7.

12. A. Sojo, *Mujer y Política*, pp. 15-20, Editorial Departamento Ecueménico de Investigaciones, San José, 1985.

13. P. Moctezuma, op. cit. p. 8.

14. Entrevista con Clara Brugada, 21 setiembre, 1990.

15. Alejandro Espinoza, investigador en Urbanismo del CIDE, afirma en una conferencia en setiembre de 1990 que el sísmo imprimió un nuevo significado al tiempo, fracturando al tiempo enajenado de las relaciones sociales capitalistas, sustituyendo el tiempo del funcionamiento normal de la ciudad. Según el académico, esta ruptura de los ritmos de la cotidianidad resultó en la quebradura de la conceptualización del orden y obediencia social, quebradura que se inicia desde el momento en que las y los habitantes asumen las tareas de gobernabilidad.

16. R. Bejarano, "Un lustro de temblores", en *Hojas*, mayo, 1990, México.

17. R. Bejarano, op. cit. pp. 22-23.

18. R. Bejarano, op. cit. p. 22.

19. D. Rodríguez Velázquez, *El Día*, "De la ciudad a la política: 1985-1988", México, DF, 19 setiembre, 1988.

20. A. Mercado, "Estructura socioeconómica y movimientos sociales en las áreas centrales de la ciudad de México" ponencia presentada el 16 de julio de 1987 en el Coloquio Nacional de Investigadores sobre las Transformaciones de los Centros Urbanos,

21. R. Bejarano, op. cit. p. 22.

22. R. Bejarano, op. cit. p. 23.

23. En la opinión de Ana Sojo, "Avanzar en la comprensión de las relaciones de poder no implica únicamente superar una visión topológica de los campos económico, político, ideológico y de otro género que le asigna a la economía el puesto primigenio de las relaciones de poder. Involucra, además, elementos relacionados con la comprensión de los mecanismos de poder actuales a todo lo largo de la trama social. Como ha señalado Foucault de una manera muy sugestiva, "en el pensamiento y en el análisis político, aún no se ha guillotinado al rey..." op. cit. p. 22.

24. *Asamblea de Barrios. Historias del Movimiento Urbano Popular*, financiado por Información Obrero, Equipo Pueblo y Asamblea de Barrios, México, 1988.

25. *Asamblea de Barrios*, op. cit. p. 9.

26. *Asamblea de Barrios*, op. cit. p. 31.

27. En referencia a sus orígenes Superbarrio explica: "El uniforme es una creación que yo no me puedo explicar todavía, pero debe ser inspiración divina. De repente vino una luz roja y amarilla... y surge una voz con sonido estereofónico que me dice: Tú eres Superbarrio, el defensor de los inquilinos pobres, el azote de los caseros... Es cosa divina. Son tres personas distintas en un sólo uniforme verdadero. Algunos enterados lo han definido como la urbanística trinidad. Hay un compañero que es luchador profesional, ese es Superbarrio sobre el ring. Otro es un inquilino común... el último soy yo: un luchador social" *Asamblea de Barrios*, op. cit., p. 30.

28. "De la Ciudad a la Política: 1985-1988", op. cit.

29. Es importante enfatizar que dicha posición sigue presente en el panorama actual del movimiento popular, urbano y rural, aunque por el momento no es la postura hegemónica dentro del rango de fuerzas que componen la "izquierda social". Sin embargo, en los últimos dos años llama la atención el avance de dicha tendencia dentro de las organizaciones sociales, su habilidad en penetrar y afianzarse dentro de ellas y la capacidad de desunión y ruptura que demuestra. Lo curioso del surgimiento del neoradicalismo es el desfase que representa frente a los acontecimientos mundiales y regionales; contradicción que se refleja en la ausencia total de un proyecto político que vaya más allá que la fe en recetas elementalísimas del materialismo histórico y dialéctico.

30. "De la Ciudad a la Política: 1985-1988", op. cit.

31. A. Espinoza, conferencia, op. cit.

32. A. Touraine, op. cit., p. 137.

33. En un documento inédito, titulado "El Movimiento Urbano Popular en México: elementos para su análisis", Armando Ramírez opina: «La concertación ha sido un elemento de incertidumbre para el MUP. Se le ha visto desde muy distintos ángulos como reconocimiento a los sujetos sociales y políticos; como desarticulador de los movimientos sociales y políticos; como legitimador de las instituciones y del gobierno; como pantalla que oculta el carácter autoritario y represivo del Estado...», p. 5.

